

PRECEDENTES EN DERECHO AMBIENTAL *

Edward ORMSTON

Un asunto que marcó precedente en el derecho ambiental internacional fue el de *R. v. Bata Industries Limited*. En agosto de 1999, dos inspectores de medio ambiente acudieron a las instalaciones de Bata, fábrica de zapatos en la que encontraron una gran pila de tambos vacíos de unos 170 litros, algunos con fugas, otros con sustancias peligrosas. El hecho les preocupó porque en las cercanías de la planta hay un río, de modo que reportaron la situación. La importancia de este caso radica en que la compañía Bata es de alcance internacional. Su dueño, el checoslovaco Thomas Bata, quien había emigrado a Canadá durante la guerra, era un exitoso hombre de negocios que contaba con ochenta fábricas de zapatos alrededor del mundo. Se sabe que Thomas Bata mantenía la sucursal canadiense sólo por motivos sentimentales, pues la fábrica perdía grandes cantidades de dinero.

En aquella época la legislación de Ontario establecía que podía responsabilizarse a los directivos de los daños ambientales ocasionados por sus compañías aunque éstos ocurrieran en sitios a cientos de millas de distancia o en los cuales nunca podían haber estado. En este caso se tenía al propietario y presidente internacional de la compañía, Thomas Bata, pero también a directores de otros niveles: Douglas Marchant, director nacional; Keith Weston, director de planta, y uno más que fungía como segundo de a bordo en la planta. ¿Hasta dónde estas personas podían considerarse responsables de los desechos? ¿Cuál era su responsabilidad particular?

El problema comenzó con las pérdidas económicas de la compañía: seis millones de dólares el último año. Para remediar esto se contrató como director a un experto en el mercado de zapatos, Keith Weston, quien redujo costos, eliminó empleos, despidió a guardias de seguridad, etcétera. El salario

* 2005.

de Weston incluía un bono tan alto como dinero ahorrara a la compañía. Al tiempo ésta se recuperó económicamente y redujo sus pérdidas.

Enterado del problema, Thomas Bata envió una circular a todas sus compañías alrededor del mundo para advertirles de las precauciones ambientales que debían tomarse. Por otro lado, una vez al año visitaba la planta en Canadá para verificar su estado y cuando hubo problemas ambientales respondió como era debido, por lo que se podía probar su interés en asuntos de medio ambiente.

Por su parte, el director Keith Weston seguía reduciendo los costos y al llegar la circular sobre los aspectos ambientales enviada por Bata le ordenó al segundo en el mando deshacerse de los tambos de desechos peligrosos. El segundo en el mando investigó el costo de este proceso. El precio por deshacerse de cada barril, con acuerdo al presupuesto que les presentó una compañía, fue de cuatrocientos dólares. Keith Weston no aceptó esta cantidad y, sin explicar razones, pidió un presupuesto más barato, que el segundo en el mando pudo conseguir. Este segundo presupuesto fue aceptado por el director de la planta sin preguntas sobre las razones del bajo precio. El trabajo, asignado a un granjero, nunca se realizó.

El presidente de la compañía en Canadá, Douglas Marchant, visitaba la planta unas dos veces al mes. En una de esas visitas el segundo en el mando le explicó el problema de los barriles, a lo cual Marchant le ordenó encargarse él mismo del asunto.

Así, se tuvo que determinar cuál era la obligación de cada uno de los directores y cuál su responsabilidad específica. Se estableció que los directores debían explicar las acciones que cada uno llevó a cabo para detener el derrame; en una palabra, debían justificar su actuación. Se estudiaron diferentes casos de carácter ambiental para decidir los lineamientos a seguir; se realizó un formato respecto a los aspectos que los investigadores deben solicitar a los directores corporativos, donde se establecía que en estos casos se debía verificar si habían establecido un programa contra la contaminación, si en el sitio se tenía un plan en marcha, si los directores tenían a alguien al mando en asuntos ambientales, si recibían informes de las condiciones ambientales, si seguían estos informes y cuáles eran sus acciones personales respecto a todas estas situaciones.

Al final se decidió que el propietario y director internacional de la empresa, Thomas Bata, no era culpable, pues había probado sus preocupaciones ambientales al enviar la circular, vigilar el estado de la planta y

corregir asuntos ambientales cuando se presentaron; por otro lado, tenía derecho a confiar en el trabajo de sus directores de planta.

El presidente nacional de la compañía, Douglas Marchant, fue hallado culpable por haber ignorado el problema mencionado por el segundo en el mando de Bata. También fue declarado culpable el director de la planta, Keith Weston, por tratar de hacer las cosas de la manera más barata posible sin dar importancia a los asuntos de carácter ambiental.

A la compañía, hallada culpable, se le permitió laborar con reservas, algo nunca hecho en Canadá. La cantidad a pagar, 120,000 dólares, no se estableció como multa, sino que se decidió que una parte de este dinero iría al gobierno y con la otra parte se crearía un lugar de manejo de sustancias tóxicas para la región. También se obligó a la compañía a publicar en su boletín de noticias que fue declarada culpable, incluido el nombre de los directores involucrados, y se le obligó a no indemnizar a estos dos directores y a tener en cuenta los asuntos ambientales en todas sus plantas. A los directores culpables se les impuso una multa, ya que al no encontrarse en Canadá no se les pudo obligar a visitar diferentes compañías para explicar lo sucedido de modo que otros empresarios observaran las consecuencias de no cuidar los asuntos ambientales.

A raíz de este caso, el gobierno cambió la ley de Ontario. En adelante, los directores deben probar sus acciones en su defensa. Por otro lado, también con base en este caso, las autoridades ambientales elaboraron una lista de compañías a las que se acude para solicitarles que prueben su cumplimiento ambiental. En tercer lugar, el mundo corporativo de Canadá resultó ambientalmente sensibilizado, ya que si una figura tan importante como Thomas Bata podía ser enjuiciado y casi hallado culpable en un proceso ambiental, otros podían verse en la misma situación.

PRECEDENTS IN ENVIRONMENTAL LAW*

Edward ORMSTON

A matter that set a precedent in international environmental law was *R. v. Bata Industries Limited et al.* In August 1999, two environmental inspectors went to a shoe factory called “Bata,” to talk about a Bingo event to be held. When they went around the building, they found a huge pile of empty 45-gallon barrels, some with leaks, and others with hazardous substances. Upon observing this environmental problem, the inspectors became concerned because there was a river nearby, and reported the situation. The important aspect of this case was that the Bata company is an international company. The owner, Thomas Bata, was Czechoslovakian and had emigrated to Canada during the war. He had been successful in his business, and owned 80 shoe factories around the world. The branch in Canada was kept going for sentimental reasons, since it was losing large amounts of money.

Ontario legislation at that time established that the directors of companies could be held responsible for environmental damages caused by the companies, even if the damage occurred at sites where they had never been, or located hundreds of miles away. Involved in this particular case was the owner and international president of the company, Thomas Bata, and there were also three other levels of directors, one at the international level, Douglas Marchant, plus another at the factory, Keith Weston, and the second-in-charge at the factory. The question was: to what degree could these individuals be considered responsible for the wastes? What was the particular responsibility of each one of them?

This problem started because the company had economic problems, and had already lost six million dollars the previous year. To remedy the situation, an expert in the shoe market, Keith Weston, was hired, and

* 2005.

asked to correct the problem and eliminate the company's losses. Eventually he reduced costs, cutting jobs by eliminating security positions, etc. Part of Weston's salary was a bonus which would be based on the amount of money he managed to save the company. The company did recuperate economically and its losses were reduced.

During those particular years, the owner and international director, Thomas Bata, sent a flier to all his companies around the world regarding the environmental precautions they should take. In addition, he visited the Bata factory in Canada once a year, to verify its conditions, and when there were environmental problems, he responded appropriately, demonstrating his interest in environmental matters.

Keith Weston, the director of the factory, continued to reduce costs and when he received the flier on environmental concerns sent by Thomas Bata, he ordered the second-in-charge to get rid of the barrels of hazardous wastes. The second-in-charge invested the costs involved in this process with an environmental company, which informed him that the cost for getting rid of each barrel would be 400 dollars. Keith Weston did not accept this estimate, and without asking about the reasons for the cost, he requested a lower estimate. The second-in-charge managed to get a lower estimate, which was accepted by Weston. Once again, he did not ask any questions about the reasons for the low cost, and the job was given to a farmer, although it was never carried out.

The president of the company in Canada, Douglas Marchant, appeared at the factory approximately twice a month. On this occasion, the second-in-charge explained the problem with the barrels to Marchant, who said he would take charge of the problem.

In this particular case, it was necessary to determine the obligations of each one of the directors and their individual responsibilities in this regard. It was established that when a spill occurred, the directors should explain the actions taken by each one of them to stop it, and should justify their actions. A number of environmental cases were studied in order to determine the guidelines to follow, and a form was developed with the aspects that investigators should cover when speaking to the company directors. It was established that it should be determined in these cases whether the directors had established a program to prevent contamination and if they had implemented a plan at the site, if the directors had assigned someone to be in charge of environmental matters, if they received

reports on environmental conditions, if they monitored such reports, and their specific individual actions with respect to these situations.

In the end, it was determined that Thomas Bata, the owner and international director of the company, was not guilty, since he had demonstrated his environmental concerns by sending the flier, supervising the conditions at the factory and correcting environmental matters when they came up. In addition, he had the right to confide in the work of his directors at the factory.

The national president of the company, Douglas Marchant, for his part, was found guilty of having ignored the problem mentioned by the second-in-charge. Plant director Keith Weston, plant director, was also found guilty of attempting to do things in the cheapest way possible, without placing any importance on environmental concerns.

The company was found guilty and placed on probation, something that had not happened previously in Canada. The amount to be paid was 120,000 dollars, however it was not established as a fine. Rather, it was decided that part of this money would go to the government and the other part would be used to create a site for handling toxic substances. The site would be responsible for toxic wastes in the region, and the company was required to publish information in its newsletter specifying that it had been found guilty and mentioning the director's names. Also, the company was required to withhold severance pay to these two directors and to take environmental matters into consideration at all of its factories. With regard to the directors found guilty, they were given a fine. Because they could not be located in Canada, it was not possible to require them to visit other companies to explain what had happened, so that other business owners would take note of what would happen if they did not carefully monitor environmental matters in their own companies.

After this situation, the government changed Ontario law, taking into account this perspective, in which directors were required to justify their actions. In addition, environmental authorities developed a list based on this case in which the various companies are noted, and they are asked to prove their compliance on environmental matters. Thirdly, the corporate world in Canada became more aware of this kind of situation. Specifically, they discovered that if someone as important as Thomas Bata could be nearly found guilty in an environmental process, others could as well, and they became concerned about not finding themselves in a similar situation.